

EDITORIAL

El apagón
acaba en tablas

El informe presentado por la ministra culpa a Red Eléctrica y a las grandes generadoras, pero evita asumir responsabilidades de planificación propias, a pesar de que REE tiene un 20% de capital público

EN medio de la oscuridad que acecha el Partido Socialista, y por extensión al Gobierno que preside Pedro Sánchez en los últimos días, ávido de noticias que desvíen el foco de sus horas más crudas tras las revelaciones de la UCO, ayer se hizo público, casualmente, el informe que analiza las causas del apagón que fundió a negro la práctica totalidad del país el 28 de abril. Un informe que reparte responsabilidades. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, dijo ayer que el apagón se produjo por un problema “multifactorial” y avanzó un decreto para reforzar el sistema. Si algo evidenció el suceso que tuvo en vilo al país durante horas es que no solo descubrió graves fallos técnicos, sino también una preocupante ausencia de liderazgo político. El informe presentado por la ministra Aagesen culpa a Red Eléctrica (REE) y a las grandes generadoras, pero evita asumir responsabilidades de planificación propias, a pesar de que REE tiene un 20% de capital público. Sabían desde la noche anterior que una de las centrales críticas no estaría disponible. Aun así, no se activaron refuerzos. Según el informe, las nueve restantes no reaccionaron como tocaba, y las desconexiones en cadena agravaron el colapso. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que el informe “no es un juicio”, evitando dimisiones y ocultando qué plantas fallaron, escudándose en la confidencialidad solicitada por el sector. La gestión fue tardía, opaca y tecnocrática. Se descartó un ciberataque, pero se identificaron vulnerabilidades que siguen sin resolverse, como la inversión millonaria necesaria para el almacenaje. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) deberá ahora investigar lo que el Gobierno no quiso afrontar y junto a la justicia serán quienes determinen quién paga las indemnizaciones a empresas y hogares afectados. En este caso, el Gobierno debería aplicarse la máxima de que no basta con señalar a otros y democratizar las culpas. Falló quien tenía que prever, coordinar y proteger.

La CNMC deberá investigar ahora lo que el Gobierno no quiso afrontar

Chupinazo por Palestina

CONOCIDOS ya los carteles anunciadores de las próximas fiestas de San Fermín y de la Feria del Toro, quedaba por desvelar y conocer a los protagonistas por excelencia del comienzo de los Sanfermines: los lanzadores del chupinazo. Salvado el debate sobre si el chupinazo debería ser preminentemente de carácter local, este año el honor va a recaer en la plataforma Yala Nafarroa con Palestina, que ha recibido el 52,85% de los votos de los ciudadanos. En total recibieron más de diez mil votos de los más de veinte mil emitidos por los ciudadanos. Una vez conocidos los resultados, los representantes de la plataforma quisieron agradecer a los participantes que “han votado para que Pamplona se convierta el 6 de julio en un referente de solidaridad, en una luz de esperanza para detener el genocidio”. Lo que aún es una incógnita es quién será el encargado de prender la mecha.

El penoso espectáculo
de la política en España



Javier Carnicero

SEGÚN refieren los medios de comunicación, en nuestro país padecemos varios problemas que parecen haberse enquistado. La mala situación del sistema de salud, el deterioro del educativo, la escasez y elevados precios de la vivienda, el mal estado de las infraestructuras ferroviarias y la elevada tasa de desempleo. A esto debería añadirse proporcionar la debida asistencia a más de mil menores no acompañados que se encuentran en Canarias más los que están repartidos por el territorio peninsular. Hace unos días se reunieron en Barcelona los presidentes autonómicos con el del Gobierno y varios ministros, se supone que para intentar resolver o al menos atenuar los problemas de los españoles. Sin embargo, en esa reunión se puso de manifiesto el desencuentro de tan altas autoridades. Nuestros dirigentes aprovecharon la ocasión para hacer lo mismo que un niño malcriado en una reunión familiar. Llamar la atención, mostrar lo mucho que les disgusta estar allí y poco más. Lo mínimo que podría esperarse es que se hubiera aprovechado el tiempo para mantener una sesión de trabajo sobre alguno de los asuntos mencionados. En vez de eso, unos aprovecharon para hablar una lengua distinta a la común y una presidenta para faltar al respeto a quienes tienen la suerte de poder expresarse en otra lengua además de en español.

No resulta nada de extrañar esta situación cuando hemos conocido el informe de la UCO sobre las actividades de tres colaboradores directos del presidente del Gobierno. Después de meses de referirse a la conspiración contra el Gobierno de la extrema derecha apoyada por jueces, fiscales, Guardia Civil y medios de comunicación, nos hemos

enterado de que, presuntamente, estos individuos han estado cobrando comisiones por adjudicaciones de obras, colocando a mujeres con las que tenían alguna relación en empresas públicas y perpetrando otras actividades presuntamente delictivas. El discurso del fango ha acabado embarrando al Gobierno y al partido del gobierno, que se encuentran inmersos en una ciénaga apesotosa. Apestosa porque, siempre presuntamente, no solo se ven involucrados en una trama corrupta, sino también porque durante los últimos 7 años han saboteado y descalificado de una manera continua y sistemática a las instituciones del Estado para intentar controlarlas.

Las presuntas fechorías que hemos conocido ponen en evidencia el motivo para deslegitimar a las instituciones de nuestra democracia. Años descalificando a los jueces y a los magistrados del Tribunal Constitucional. Años ignorando los procedimientos de revisión de los proyectos de ley por el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. Años en los que se han empleado de manera abusiva las proposiciones de ley y los reales decretos leyes para esquivar a estas instituciones. Años de atacar a medios de comunicación que se han permitido no hacer la ola a los miembros del gobierno. Preguntar de manera prepotente de quién depende la fiscalía es toda una decla-

ración de principios. Defender al Fiscal General del Estado, que como mínimo es responsable de la mala custodia de documentación confidencial en la fiscalía, sin importar el enorme perjuicio que se causa a la institución y descalificando a un juez del Tribunal Supremo. El colmo de todo lo anterior ha sido conocer las actividades de una autodenominada periodista de investigación tratando de encontrar materia para desacreditar a fiscales y al mando de la UCO. El poder corrompe, el poder cuando no se controla de manera adecuada tiende a ser absoluto y el poder absoluto corrompe absolutamente. No se acaba de comprender que los dos ex secretarios generales del PSOE y su asesor hayan sido capaces, presuntamente, de manipular adjudicaciones de obras públicas a cambio de comisiones en diferentes administraciones públicas, sin que contaran con la complicidad de personas dentro de esas administraciones públicas. De la misma manera, se precisa la complicidad de los directivos de las empresas públicas que han colocado, en algunos casos sin trabajar, a personas por indicación del exministro y sus colaboradores. Todos estos hechos, presuntos, indican que se trataría de una corrupción sistémica vinculada a la estructura del partido y de miembros del gobierno.

Los ciudadanos medianamente conscientes de la situación nos hemos quedado sin palabras con los “cambios de opinión” del presidente, al parecer todos legítimos si son necesarios para mantenerse en el poder, y todavía sin reponernos de la estupefacción por los indultos a los condenados por el llamado procés, hemos asistido a la aprobación de la ley de amnistía, algo negado hasta la víspera de las últimas elecciones generales. No resulta de extrañar que quien es sospechoso de haber plagiado su tesis doctoral sea ahora sospechoso de haber dado un pucherazo en las elecciones que le llevaron a liderar su partido. Cuando el único programa político es alcanzar y mantener el poder, los medios para conseguirlo carecen de importancia.



AL ERAD

Javier Carnicero Giménez de Azcárate. Exdirector del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea

DIARIO DE NAVARRA Fundado en 1903

EDITA: Diario de Navarra, S.A.U.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Luis Colina Lorda

DIRECTOR GENERAL José Manuel Erro Miranda

DEPÓSITO LEGAL:
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301.
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263.
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255

DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001
Teléfono 948 22 13 55

REDACCIÓN
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191
redaccion@diariodenavarra.es



DIRECTOR Miguel Ángel Riezu Boj

SUBDIRECTORES
Nacho Calvo (Contenidos) y Fernando Hernández (Transformación y Desarrollo Digital).

REDACTORES JEFES
Luis Guinea, Jesús Manrique, Jesús Rubio y Marcos Sánchez.

JEFES DE SECCIÓN
José María Belcos, Fernando Ciordia,
José Carlos Cordovilla, Pilar Fernández Larrea,
Yulen Garmendia y Germán Larrañaga.

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063
DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

Prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1. párrafo segundo de la Ley de Propiedad Intelectual, conforme a la redacción dada por la Ley 23/2006, de 7 de julio.

TELÉFONOS	
Centralita	948 236050
Redacción	948 236050
Publicidad	948 221355
Fax Publicidad	948 206048
Distribución	948 236000
Suscripciones	948 076068